

Abandono de la Ruta Q-61

La Ruta Q-61 vuelve a ser motivo de profundo dolor. Nueve siniestros mayores entre enero y la primera semana de junio —siete colisiones y dos volcamientos, con cinco muertos y varios heridos graves— bastan para explicar por qué los vecinos y autoridades locales la llaman “ruta de la muerte” y, en la actualidad, exigen justicia y gasto público.

En los últimos cinco años, la región del Biobío ha vivido un auge inédito de inversión pública: el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecutó proyectos por US\$663 millones entre 2020 y 2022, de los cuales más de la mitad correspondió a vialidad. En 2022, se alcanzó un récord cercano a \$250 mil millones, y la tendencia se consolidó en el presupuesto 2023, que escaló a \$300 mil millones, con un aumento interanual de 20%.

Pero la inversión no se distribuye de manera equitativa. Concepción y su área metropolitana concentran buena parte de los recursos, sobre todo, por obras de puentes, ampliaciones de costaneras, viaductos urbanos y de modernización del eje portuario. Incluso, la históricamente postergada provincia de Arauco logró que el MOP focalizara 28 contratos de obras y 11 estudios de ingeniería por \$130 mil millones entre 2023 y 2024, en respuesta a la presión social y al rezago logístico de su territorio.

Muy por el contrario, la provincia de Biobío, que concentra la mayor superficie y red vial del sur andino, aparece en los comunicados oficiales solo para destacar intervenciones puntuales: un puente aquí, la repavimentación de un camino rural allá. Ninguna de esas iniciativas, pese a su valor local, aborda la Ruta Q-61 como un corredor estructurante.

El resultado es evidente: la calzada permanece angosta, la señalización es deficiente, falta una berma iluminada y los cruces poseen visibilidad precaria, constituyendo un catálogo de factores de riesgo.

La tragedia familiar del 31 de mayo, que produjo tres lamentables fallecimientos, se suma a la lista que recoge

choques de buses, camiones y vehículos particulares desde hace más de una década, con hitos tan antiguos como el accidente que dejó veinte heridos en 2013 y episodios frecuentes en 2016, 2018, 2022 y 2024. Cada colisión reaviva la misma pregunta: ¿por qué la ruta que conecta al mayor núcleo urbano del sur del Biobío con sus comunas cordilleras sigue a merced del azar?

Los datos entregan una respuesta parcial: la única intervención relevante para la Q-61 —licitada a fines de 2020 para la “conservación y seguridad vial”— bordeó los \$300 millones. Aquellas faenas, limitadas a la demarcación de algunos sectores y al cambio de señalética, terminaron en 2021 sin alterar de forma sustantiva el estándar de la vía.

Ayer, los familiares de las víctimas fatales, evidentemente cansados por la situación, bloquearon la ruta para exigir justicia y un plan de obras que termine con la racha de muertes evitables. Tras la manifestación, el alcalde Cristian Oses reiteró la exigencia de un proyecto integral: ensanchamiento, iluminación completa, barreras de contención, pasos peatonales seguros y una fiscalización que disuada el exceso de velocidad.

El Estado tiene la ocasión de corregir el sesgo territorial que, como en tantas otras ocasiones, ha dejado atrás a la provincia de Biobío. La Ruta Q-61 transporta estudiantes, trabajadores forestales, turistas y familias completas, y es la arteria que une a los pehuenches con los servicios de salud de alta complejidad y a los agricultores del valle con los mercados de la capital provincial.

Los próximos presupuestos ya están en discusión. Si la palabra equidad tiene sentido, el Gobierno Regional y el MOP deben priorizar de manera explícita la reposición integral de la Q-61, con un calendario y un financiamiento equivalentes al volumen destinado a las grandes autopistas costeras. Seguir posponiendo implica avalar, por omisión, la estadística que la propia comunidad ha documentado con dolor y rabia.